



CSJ 632/2016

ORIGINARIO

Arcor S.A.I.C. c/ Neuquén, Provincia del s/  
acción declarativa de certeza.

## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 20 de Abril de 2023

Vistos los autos: "Arcor S.A.I.C. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", de los que

Resulta:

I) A fs. 406/429 Arcor S.A.I.C. promueve la acción prevista en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia del Neuquén, a fin de que se disipe el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse por la creación de un sistema de inspección, control y fiscalización higiénico sanitaria, aplicado al tránsito interjurisdiccional de productos alimenticios que ingresan a su territorio, en función del cual se le exige el cobro de un tributo denominado "Tasa por Reinspección Bromatológica", con sustento en los arts. 1, 3, 7, 15 y concordantes de la ley provincial 2766, y en el decreto provincial 1751/1997.

Solicita que se declare que, en base al Código Alimentario Argentino, su decreto reglamentario 815/1999 y los arts. 9, 10, 11, 12 y 75 (incs. 13 y 18) de la Constitución Nacional, la pretensión fiscal provincial resulta inconstitucional.

Manifiesta que la firma se dedica a la elaboración de productos alimenticios y que posee plantas industriales, distribuidas entre las provincias de Córdoba, Buenos Aires, San Luis y Tucumán, las que cuentan con el Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Alimenticios. A su vez, informa que los productos elaborados o

comercializados por la empresa actora cuentan con el Certificado de Inscripción de Productos Alimenticios, expedidos por la autoridad competente en cada jurisdicción, por lo que son de libre circulación y comercialización en todo el territorio de la República Argentina.

Describe pormenorizadamente la operatoria -de control bromatológico y pago de la pertinente tasa- a la que se ve obligada la empresa actora cada vez que ingresa a la provincia mercadería cuyo origen está ubicado fuera de la jurisdicción provincial.

Pone de resalto que el Estado provincial restringe el principio de libre circulación de las mercaderías que ya han sido debidamente controladas y certificadas por la autoridad competente, servicios por los cuales la actora ha pagado las pertinentes tasas, previstas en el art. 17 del decreto 815/1999.

Afirma que el tributo local viola el inc. 13 del art. 75 de la Constitución Nacional, así como la ley 18.284 y sus decretos reglamentarios 2126/1971 y 815/1999.

En consecuencia, considera que la demandada pretende erigir una "aduana interior", prohibida por los arts. 9, 10, 11 y 12 de la Constitución Nacional.

II) Por resolución de fs. 437/437 vta. esta Corte resolvió declarar que la presente causa corresponde a su competencia originaria, corrió traslado de la demanda a la



CSJ 632/2016

ORIGINARIO

Arcor S.A.I.C. c/ Neuquén, Provincia del s/  
acción declarativa de certeza.

## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Provincia del Neuquén y admitió la medida cautelar requerida por la accionante en el escrito de inicio, la que fue ampliada por resolución del 26 de diciembre de 2018 (expediente CSJ 632/2016/1).

III) A fs. 472/477 vta. se presenta la Provincia del Neuquén, contesta la demanda y solicita su rechazo. Niega que la tasa impugnada sea ilegítima, que las normas cuestionadas por la actora contravengan al Código Alimentario Nacional y que conformen una "virtual aduana interior".

También niega la existencia de un estado de incertidumbre, de un asunto concreto y que la vía procesal elegida sea la idónea. Afirma que CIPPA (Control de ingreso provincial de productos alimenticios), organismo creado por la ley local 2766, es la autoridad de aplicación del Código Alimentario Argentino y que da estricto cumplimiento a lo allí dispuesto, al cumplir con el control bromatológico en la jurisdicción de destino.

Manifiesta que la disposición prevista en el art. 19 del decreto nacional 815/1999, en cuanto limita a las bocas de expendio al consumidor el control que puede ejercer la provincia, resulta inconstitucional, por contrariar al art. 99, inc. 2° de la Constitución Nacional, pues no pueden emitirse reglamentos que alteren el espíritu de las leyes.

Opone excepción de falta de legitimación pasiva para obrar, basándose en que, de conformidad con los incs. b y d del

art. 7° de la ley 2766, los montos obtenidos por la tasa aquí impugnada corresponden al patrimonio del CIPPA -que es una entidad autárquica- y no al Tesoro provincial, por lo que entiende que la relación procesal debe entablarse con dicho organismo.

Corrido el traslado de la referida excepción, la accionante solicita su rechazo, por los argumentos expuestos a fs. 481/483 vta.

IV) A fs. 487 consta el acta de la audiencia designada en los términos del art. 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, donde se dispuso un traslado por su orden a las partes, el que fue contestado únicamente por la actora, a fs. 488/489.

V) A fs. 493 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal y a fs. 494 se pasan los autos para dictar sentencia.

Considerando:

1°) Que, tal como lo decidió el Tribunal a fs. 437/437 vta., esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2°) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

precaver los efectos de la aplicación de una norma local, la ley 2766, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

En ese sentido, en el presente proceso se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada dirigida a la percepción de la tasa que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, de la prueba documental agregada a la causa se desprende que la actividad desplegada por la autoridad provincial tiene entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica, por lo que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606; 311:421, entre otros).

En consecuencia, corresponde concluir en que se encuentran reunidos los recaudos exigidos por el art. 322 del código de rito, para la procedencia formal de la acción declarativa.

3º) Que en lo atinente a la falta de legitimación pasiva para obrar, opuesta por el Estado provincial demandado, si bien es cierto que el CIPPA ("Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios") es un ente autárquico creado por el art. 1º de la ley 2766, no lo es menos que, tal como lo señala la señora Procuradora Fiscal en su dictamen de fs. 493 (por remisión al dictamen emitido el 30 de julio de 2018 en la causa

CSJ 4101/2015), el objeto de la pretensión se vincula con la potestad y la obligación tributaria, que son aspectos que exceden los inherentes a la función de fiscalización bromatológica y de recaudación de la tasa aquí impugnada asignada al referido órgano de la administración fiscal (conf. Fallos: 332:1422 y 1624).

Por lo tanto, el planteo no resulta procedente.

4°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a decidir en el caso presenta sustancial analogía con las ya examinadas y resueltas por el Tribunal en las causas CSJ 238/2010 (46-L)/CS1 "Logística La Serenísima S.A. y otros c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad"; CSJ 834/2012 (48-M)/CS1 "Milkaut S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de certeza"; CSJ 890/2011 (47-M)/CS1 "Molfino Hermanos Sociedad Anónima c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de certeza" y CSJ 788/2012 (48-S)/CS1 "Sucesores de Alfredo Williner S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencias del 9 de diciembre de 2015, 15 de marzo de 2016, 17 de diciembre de 2020 y 22 de diciembre de 2020, respectivamente, a cuyos fundamentos y conclusión corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad.



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

El juez Rosenkrantz se remite a las consideraciones efectuadas en su voto emitido en la causa CSJ 890/2011 (47-M)/CS1, antes citada.

Que no obsta a esa conclusión lo manifestado en el punto VII de la contestación de demanda (fs. 476/477 vta.) relativo a la inconstitucionalidad del art. 19 del decreto nacional 815/1999, sobre la base de esgrimir, únicamente, una invasión de "la competencia local para realizar el control sanitario y bromatológico en su jurisdicción de cualquier modo que razonablemente determine la Provincia...".

En efecto, tan escueta y genérica alegación de inconstitucionalidad, desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente, resulta insuficiente para que este Tribunal ejerza la atribución que reiteradamente ha calificado como la más delicada de las funciones que pueden encomendarse a un tribunal de justicia (conf. Fallos: 344:3209, 3458 y sus citas, entre muchos otros), como lo señala la propia provincia demandada en el punto VI.5 de fs. 475 vta., tanto más cuando esta Corte ha destacado la gravitación de dicha norma, que posee carácter complementario de lo preceptuado en la parte final del texto original del art. 3° del Código Alimentario Argentino (conf. causa CSJ 238/2010 (46-L)/CS1 "Logística La Serenísima S.A. y otros c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", párrafo 5° del considerando 7°, sentencia del 9 de diciembre de 2015, ya citada, y sentencia interlocutoria dictada el 26 de diciembre de 2018 en el

incidente sobre medida cautelar de estas actuaciones, expediente CSJ 632/2016/1).

5º) Que por las razones expresadas se hará lugar a la demanda y se declarará la inconstitucionalidad de los arts. 3, 7 (inc. b) y 15 de la ley local 2766, en cuanto a la cuestión aquí controvertida.

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: I. Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva, opuesta por la parte demandada. II. Hacer lugar a la demanda y declarar la invalidez constitucional de los arts. 3, 7 (inc. b) y 15 de la ley 2766 de la Provincia del Neuquén, en cuanto al tema aquí debatido. III. Las costas se imponen a la parte demandada (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, remítase copia a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.





## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Parte actora: **Arcor S.A.I.C.**, representada por los **doctores Federico Iván Gottlieb y Tristán Segundo Buzzi**, con el patrocinio letrado del **doctor Álvaro Carlos Luna Requena**.

Parte demandada: **Provincia del Neuquén**, representada por el señor **Fiscal de Estado**, **doctor Raúl Miguel Gaitán**, y por su letrado apoderado, **doctor Hugo Nelson Prieto**.